



Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soacha - Cundinamarca

Tipo de Proceso		Acción de Tutela	
Radicación del Proceso		257543103002 202300204	
Accionante	Claudia Joanna Kallianth Gutiérrez		
Accionado	Juzgado Tercero (03) de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Soacha Cundinamarca		
Vinculado	Banco Agrario de Colombia		
Derecho	Debido proceso	Decisión	Carencia de objeto – Hecho superado
Soacha, veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)			

Asunto para Tratar

Despacho resolver la solicitud de tutela impetrada por **Claudia Joanna Kallianth Gutiérrez** en contra de la entidad **Juzgado Tercero (03) de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Soacha Cundinamarca**.

Solicitud de Amparo

Obra escrito tutelar, donde la accionante plantea sus pretensiones.
 [0003EscritoTutela20230921.pdf](#).

Trámite

La presente acción de Tutela fue admitida mediante auto del veintiuno (21) de septiembre y de dos mil veintitrés (2023), en el cual, se ordenó notificar a las partes para que ejercieran su derecho de defensa y quienes intervengan en el proceso.  [0006AutoAdmiteTutela20230921.pdf](#).

Informe rendido por el despacho Juzgado Tercero (03) de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Soacha Cundinamarca.

El día veintidós (22) de septiembre de dos mil veintitrés (2023), el despacho accionado, dio respuesta en sede de tutela, indicando que, la parte ejecutante solicita al despacho se termine el proceso por haberse realizado el pago total de la obligación, siendo despachada favorablemente, y por tanto decretándose la terminación del proceso por pago, por medio de proveído de fecha 9 de junio de 2022. Indicando que es el estado de la actuación, se encuentra que la apoderada de la parte demandada el 10 de noviembre de 2022 solicita por medio de memorial aportado, que se ordene la entrega de la suma de \$2.661.905 en concordancia con lo manifestado en la solicitud de terminación allegada por la ejecutante previamente, siendo reiterada el 2 de agosto de 2023, ingresando las diligencias al despacho el 11 de agosto de 2023. Por lo que expone que, son razones de hecho y derecho para que la acción de tutela sea negada por cuanto este despacho no ha incurrido en vulneración a derecho fundamental alguno del accionante  [0008ContestacionTutelaJuz03Pccm20230922.pdf](#)

Posteriormente, mediante mensaje de datos el despacho accionado indico, “*dando alcance a la comunicación allegada a su despacho el día 22 de septiembre del año en curso, me permito informar que revisada la solicitud elevada por Claudia Joanna Kallianth Gutiérrez, dentro del proceso Ejecutivo para la Efectividad de la Garantía Real radicado bajo el número 2018-00589, militante a doc. 78, se procedió por secretaria a realizar informe de títulos (doc. 80), donde se evidencia el título de depósito judicial único, constituido por un valor de \$2'661.905,00, valor que coincide con el solicitado por la aquí accionante, en concordancia con lo manifestado por la parte demandante en su solicitud de terminación (doc. 70), razón por la cual, este despacho se dispuso a ordenar por medio de providencia adiaada 22 de septiembre de 2023, y notificada por estado el 25 de septiembre del año en curso, la entrega de los títulos correspondientes a la parte demandada, siendo la apoderada de este extremo procesal quien funge como accionante en la acción constitucional de la referencia.*”

 [0012Juz03PccmDandoAlcanceContestacionTutela20230925.pdf](#)

El vinculado banco Agrario, indica que teniendo en cuentas los hechos de la acción de tutela, se encontró 1 deposito judicial a órdenes de la cuenta judicial 0003 Pequeñas Causas Competencia Múltiple de Soacha; solicita al despacho se sirva desvincular de la presente acción de tutela al Banco Agrario de Colombia, pues no se evidencia que la entidad haya vulnerado los derechos fundamentales de la accionante.  [0009ContestacionTutelaBancoAgrario20230922\(FH\).pdf](#)

Asunto	Acción de Tutela
257543103002 20230204	
Soacha, veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)	

Fundamentos de la Decisión

Problema Jurídico

Corresponde al Juez de tutela, determinar si la entidad accionada Juzgado Tercero (03) de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Soacha Cundinamarca y el banco vinculado; están transgrediendo presuntamente el derecho fundamental a la vida, al no realizar la entrega del título judicial por valor \$2.661.905, por concepto de honorarios profesionales.

Del Debido Proceso

Respecto a este, es procedente la acción de tutela cuando se erige para impedir que las autoridades públicas, mediante vías de hecho vulneren o amenacen tal derecho fundamental, de ahí, que los servidores públicos deban actuar conforme las funciones atribuidas por la constitución o por la ley. Es necesario precisar que al dirigirse el amparo contra providencia judicial, la jurisprudencia es diáfana y terminante al señalar que la acción de tutela, según lo consagrado en el art. 86 de la Constitución Política y lo decidido en sentencia C-543 de 1992, no procede contra sentencias y providencias judiciales, salvo la existencia de una vía de hecho que implique la violación o amenaza de derecho constitucional fundamental que pueda causar un perjuicio irremediable, según reitera en múltiples fallos.

Pruebas

Inspección Judicial

Para efectos de estudiar el proceso ejecutivo hipotecario n° 2018-0589. [C02ProcesoObjetoRevisionJuz03PCCM](#)

Desarrollo

En reiterada jurisprudencia se ha sostenido, que la acción de tutela por su carácter residual, no puede constituirse en un mecanismo alternativo o que sustituya otros medios de defensa ordinarios. Igualmente, y en principio se tiene que es improcedente contra decisiones judiciales, salvo que en ellas se incurra en las causales expresamente establecidas por la Jurisprudencia constitucional, cuando aquellas se apartan del ordenamiento legal, violando así derechos fundamentales de alguna persona.

Es menester, establecer que la acción de tutela tiene por objeto proteger a las personas cuando sea evidente un perjuicio irremediable. Por lo anterior es pertinente, citar el precedente judicial de la H. Corte Constitucional conforme a la sentencia SU 184 de 2019:

“El artículo 86 de la Constitución Política consagró la acción de tutela y estableció expresamente que ella puede ser promovida para obtener la protección inmediata de los derechos fundamentales “cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Con base en este mandato, la jurisprudencia constitucional ha señalado reiteradamente desde sus primeros pronunciamientos que la acción de tutela procede excepcionalmente contra providencias emitidas por los jueces de la República.

Inicialmente, en la Sentencia C-547 de 1992, la Corte declaró la inexecutable de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, que regulaban la procedencia de la tutela contra sentencias judiciales. En esa oportunidad la Corte explicó que: (i) por regla general, el recurso de amparo no procedía contra providencias judiciales; (ii) la jurisdicción ordinaria era el escenario natural para resolver las controversias relativas a los derechos de los ciudadanos; (iii) las decisiones de los jueces estaban revestidas por el efecto de la cosa juzgada, que garantiza la seguridad jurídica como elemento esencial del Estado de Derecho; y (iv) que se debe respetar el principio de la autonomía e independencia de los jueces. No obstante, en ese pronunciamiento se admitió que la tutela era procedente contra actuaciones u omisiones del juez, distintas a la providencia judicial o contra “vías de hecho judiciales”.

La evolución jurisprudencial en la materia, llevó a concluir a la Corte, que, no obstante, la relevancia constitucional de los principios de autonomía judicial y seguridad jurídica, el amparo constitucional podría proceder excepcionalmente cuando se reunieran un conjunto de estrictos requisitos contemplados en la propia jurisprudencia. A propósito de una discusión en la que se veían envueltos estos criterios, la Corte profirió la Sentencia C-590 de 2005, en la que estableció las causales de orden general y especial que debe examinar el juez para determinar si la acción de tutela procede como mecanismo de protección frente a la decisión adoptada por otra autoridad judicial. En particular, la Corte advirtió que la tutela procede únicamente cuando se verifica la concurrencia de la totalidad de los requisitos generales de procedencia, que se mencionan a continuación:

- (i) “Que la cuestión que se discuta tenga una evidente relevancia constitucional; (...)
- (ii) Que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable;(...)
- (ii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez;(...)
- (iv) Que, tratándose de una irregularidad procesal, quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. (...)

Asunto	Acción de Tutela
257543103002 20230204	
Soacha, veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)	

(v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados, y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible;(…) y
 (vi) Que no se trate de sentencias de tutela (...).”

Los anteriores requisitos generales de procedibilidad funcionan como parámetro de cumplimiento de intervención del juez constitucional. En ese sentido, la superación de los anteriores requisitos implica la aceptación de un estudio específico de los requisitos especiales de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por tanto, si no se cumplen con ninguno de los anteriores, el juez constitucional no podrá continuar con un examen de fondo sobre la vulneración de los derechos fundamentales y, como consecuencia de ello, deberá declarar la improcedencia de la acción de tutela”.
 (Sentencia SU 184/2019, 2019)

Acorde a lo anterior, resulta viable hablar de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y, en consecuencia, es posible, a través de la acción de tutela, la protección de los derechos fundamentales, cumpliendo los requisitos generales de procedencia.

En atención a los postulados trascritos, se tiene que el asunto reviste de relevancia constitucional, pues con las resultas del fallo presuntamente se verían afectados derechos supra.

Sin embargo, debe advertirse que la presente acción no es una tercera instancia, por lo que a través de ella no puede controvertirse aspectos que no fueron puestos de presente en el proceso judicial, o de suyo, pretermitir etapas procesales ya agotadas.

Por su parte, a lo indicado por el H. Corte Constitucional, al verificar la concurrencia de la totalidad de los requisitos de procedencia de la acción constitucional de tutela en contra de providencia judicial, la verificación del principio de inmediatez debe ser más estricto.

A lo anterior, el principio de inmediatez, se debe tener en cuenta la exigencia de un término razonable entre la vulneración del derecho fundamental del peticionario y la presentación de la tutela, evitando el uso de este mecanismo constitucional como herramienta, es así que, la acción de tutela procede “dentro de un término razonable y proporcionado”, contando a partir del momento en el que se produce la violación del derecho. En este sentido, la inmediatez con la que debe ejercerse la acción es un factor determinante para su procedencia, pues su objeto y finalidad tiene relación directa con la necesidad de proteger de manera pronta y efectiva los derechos fundamentales de las personas, cuyo amparo, por su propia naturaleza, no puede aplazarse en el tiempo.

En el presente caso, se tiene que la actuación que se reclama como violatoria, es la no entrega del título judicial por la suma de \$2.661.905,00, con ocasión de la terminación del proceso por pago total de la obligación.

Caso Concreto

Según el dicho de la accionante, interpone el presente instrumento constitucional, solicitando:

De antaño, la Corte Constitucional ha previsto que, partiendo de una interpretación sistemática, tanto de la Constitución, como de los artículos 5º y 6º del Decreto 2591/1991, se deduce que la acción u omisión cometida que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito lógico - jurídico para la procedencia de la acción tuitiva de derechos fundamentales.

Superado el examen preliminar, corresponde entonces analizar la solicitud en sede de tutela, que se concreta en que:

Según el dicho de la accionante, interpone el presente instrumento constitucional, solicitando:

“Con fundamento en los hechos relacionados, solicito al señor Juez tutelar los derechos fundamentales vulnerados por el accionado, y en consecuencia de ello, se sirva Ordenar JUZGADO 03 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE SOACHA-CUNDINAMARCA, la emisión de título a nombre de claudia Joanna Kalliath Gutiérrez (por

Asunto	Acción de Tutela
257543103002 20230204	
Soacha, veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)	

concepto de honorarios profesionales) CC. No 38211663 de Ibagué para ser cobrado en el Banco Agrario sucursal centro de Bogotá CII 12c No 8 -39".

Observa esta Juzgadora que dentro del trámite procesal del instrumento constitucional el despacho accionado profirió providencia judicial con fecha del veintidós (22) de septiembre de la presente anualidad, proveído que resolvió en su parte pertinente:

"... En atención a lo solicitado por la apoderada del extremo demandado militante a doc. 77 y 78 del expediente digital y por ser procedente, se ordena que por secretaría sean entregados los títulos judiciales existentes para el presente proceso a quien le hayan sido descontados, déjense las constancias del caso."

Así las cosas, este Despacho Constitucional, observa que el despacho **Juzgado Tercero (03) de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Soacha - Cundinamarca**, resolvió de fondo el pedimento solicitado por la tutelante dentro de la acción Constitucional (*Ejecutivo Hipotecario*) objeto de controversia, por lo anterior no se estaría ante la vulneración de ningún derecho fundamental; por ende, los hechos que dieron origen a la presente acción de tutela han sido superados por el despacho accionado, al dar respuesta de fondo con la contestación del presente instrumento constitucional y el que se pone de presente a la accionante, con el presente fallo.

Al encontrarnos ante un hecho superado, este instrumento constitucional de defensa ha perdido su objetivo y en consecuencia resultaría ineficaz, en razón a que el motivo de reclamación ha sido resuelto y no habría lugar a ordena la ejecución de un hecho que ya se sucedió. Entonces la orden que pudiera impartir el Juez de Tutela no tendría ningún efecto en cuanto a la efectividad del derecho presuntamente vulnerado.

En conclusión, la situación de hecho que dio origen a la violación o la amenaza ya ha sido superada en el sentido de que la pretensión erigida en defensa del derecho conculcado está siendo satisfecha, la acción de tutela pierde su eficacia y su razón de ser.

Aunado a lo anterior, la H. Corte Constitucional determino frente a la carencia de objeto por hecho superado, en la Sentencia T 038 – 2019 que:

"La Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha indicado que la carencia actual de objeto se configura cuando frente a las pretensiones esbozadas en la acción de tutela, cualquier orden emitida por el juez no tendría algún efecto o simplemente "caería en el vacío". Específicamente, esta figura se materializa a través en las siguientes circunstancias:

Hecho superado. Este escenario se presenta cuando entre el momento de interposición de la acción de tutela y el fallo, se evidencia que, como consecuencia del obrar de la accionada, se superó o cesó la vulneración de derechos fundamentales alegada por el accionante. Dicha superación se configura cuando se realizó la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto, terminó la afectación, resultando inocuo cualquier intervención del juez constitucional en aras de proteger derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los ha garantizado." (Sentencia T-038/19, 2019)

Rememórese que el Juez en sede de tutela debe verificar la totalidad de los requisitos generales de procedencia establecidos por la H. Corte Constitucional, no se cumplen en su totalidad, y en especial *"que se trate de una irregularidad procesal, quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora"* pues como se estableció anteriormente el despacho accionado ha respetado las garantías procesales a las partes dentro del proceso de Litis.

Por otra parte, el juez de tutela no debe suplir la actuación del juez de conocimiento, de suyo se tiene que la accionante refiere como trasgredido su derecho al debido proceso, derecho que goza de ser fundamental, sin embargo, como ya se dijo no se observa una irregularidad procesal conforme lo descrito en la sentencia SU 184 de 2019.

Asunto	Acción de Tutela
257543103002 20230204	
Soacha, veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)	

Siendo estos los argumentos para declarar improcedente por configurarse el fenómeno de carencia de objeto por hecho superado de la acción constitucional solicitada por la parte accionante en sede de tutela.

En mérito de lo expuesto, este juzgado en instancia de juez de tutela en nombre de la República de Colombia y por mandato de la Constitución y la ley.

Resuelve

Primero: Declarar carencia de objeto por hecho superado ante la acción impetrada por la accionante **Claudia Joanna Kallianth Gutiérrez**; de conformidad con la parte considerativa del presente fallo.

Segundo: Notifíquese de esta decisión a las partes involucradas por el medio más expedito.

Tercero: De no ser impugnada esta decisión remítase la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y Cúmplase



Paula Andrea Giraldo Hernández
Juez



Juzgado Civil del Circuito
de Cundinamarca



Firmado Por:
Paula Andrea Giraldo Hernandez
Juez Circuito
Juzgado De Circuito
Civil 002
Soacha - Cundinamarca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **bd9ee41fac306af8d6e12e2e03b8b2d1fd1999dbe179a5547d509dec249ded03**

Documento generado en 29/09/2023 09:11:45 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>